BOLIVIA PRESS 2000 – N° 2
(18 de febrero del 2000)

En este boletín:

NOTICIAS COMENTADAS

1. La segunda batalla del agua en Cochabamba
2. Posible alivio de la deuda externa boliviana
3. Otro derrame de petróleo, esta vez en el río Desagüadero
4. ELFEC amenaza con invertir fuera del país
5. Gobiernos municipales inician nueva gestión en condiciones difíciles

TEMA DE ANÁLISIS: La trágica guerra de los ayllus

MISCELÁNEA

NOTICIAS COMENTADAS

1. LA SEGUNDA BATALLA DEL AGUA EN COCHABAMBA

LOS HECHOS. Cuando faltaban 10 días para cumplirse el plazo fijado en el convenio que puso fin al conflicto de enero (ver Bolivia Press anterior, Tema de Análisis), la Federación de Regantes y la “Coordinadora” anunciaron una movilización para el viernes 4 de febrero a la que llamaron la “Toma de Cochabamba”. Preventivamente el Ministerio de Gobierno militarizó Cochabamba (con Policía Militar traída de otros distritos) y violentamente impidió el acceso de los manifestantes a la Plaza 14 de Septiembre. La reacción de la ciudadanía fue de apoyo decidido a los manifestantes, con lo que se produjo un enfrentamiento que duró dos días y que se fue radicalizando de hora en hora, con saldos de 150 detenidos, 90 heridos y se dice que 2 desaparecidos. Gracias a la intervención mediadora del Arzobispo y del Delegado del Defensor del Pueblo se pudo llegar al sábado a un convenio que en síntesis reiteraba los acuerdos del mes pasado, pero añadiendo la congelación de las tarifas del agua hasta que se alcance acuerdos definitivos respecto del Contrato con “Aguas del Tunari” y respecto de la Ley de Servicios Básicos, Agua Potable y Alcantarillado. En este momento los comisiones mixtas (Gobierno-Cochabamba, con presencia de los mediadores) están trabajando activamente.

COMENTARIO. En primer lugar, todos los comentaristas de prensa (para no mencionar a la oposición política) coinciden en calificar de desatinada la acción represiva del Gobierno, gracias a la cual una manifestación –que, pese a su denominación poco feliz, probablemente no hubiera pasado de una demostración de fuerza y presencia-- se convirtió en una auténtica batalla campal que dejó herida y enfurecida a la gran mayoría de la población cochabambina, y que al final del sábado empezaba a concitar la solidaridad de algunos sectores (campesinos y transportistas) de La Paz, Santa Cruz y Oruro. En segundo lugar, el resultado de esta nueva batalla fue claramente favorable para los intereses de la población de Cochabamba y para su conducción (la “Coordinadora”), ya que al quedar congeladas las tarifas (lo que de paso dejó en posición desairada a la Superintendencia y a la empresa), el tiempo dejó de correr a favor del Gobierno y empezó a correr a favor de los manifestantes. De todas maneras todavía no hay nada dicho acerca del desenlace final de este conflicto (ver “30 Días” de enero pasado).

2. POSIBLE ALIVIO DE LA DEUDA EXTERNA BOLIVIANA

LOS HECHOS. El Banco Mundial y el FMI aceptaron a Bolivia como país elegible para el segundo plan de alivio de deuda para países especialmente pobres (el primer plan condonó a Bolivia US\$ 1.200 millones), con lo que se abre la posibilidad de que la deuda externa del país disminuya en 1.300 millones de dólares más, siempre y cuando el Gobierno convoque a un Diálogo Nacional para definir un plan serio de lucha contra la pobreza. El Ministro interino de Hacienda, Ramiro Cavero, aclaró que esta condonación no constituye una reducción del monto global de la deuda externa, sino una reducción del flujo de pagos (90 millones anuales), lo que a lo largo de 15 años equivaldrá a 1.300 millones.

COMENTARIO. Si bien cualquier alivio de deuda resulta bienvenido (pues indirectamente representa un alivio económico para el conjunto de la población, que es el que paga la deuda), no se debe perder de vista que lo que motiva a los organismos multilaterales para reducir las obligaciones de Bolivia es el bajísimo índice de desarrollo humano que sigue presentando nuestro país; lo que no resulta muy tranquilizante. Pero además sectores populares organizados (como la CSUTCB) afirman que la reducción anterior no significó ningún beneficio para la población más desfavorecida (a lo que el Gobierno sólo puede responder que “se hizo algunas escuelas”), de manera que --en las presentes circunstancias de crisis económica y de consiguiente iliquidez del Tesoro-- cabe poner en duda que el Gobierno sea capaz de emplear eficientemente esos millones (que no va recibir, sino que simplemente va a dejar de gastar) en una campaña de alivio real de la pobreza.

3. OTRO DERRAME DE PETRÓLEO, ESTA VEZ EN EL RÍO DESAGÜADERO

LOS HECHOS. A causa de un turbión, el penúltimo día de enero se produjo una ruptura en el km 718 del oleoducto Sica Sica-Arica –ahora propiedad y responsabilidad de la empresa TRANSREDES--. El derrame de petróleo inicialmente contaminó el río Desagüadero, pero rápidamente llegó al lago Poopó. Además de la dramática contaminación de las aguas (con graves consecuencias para los pescadores), el Prefecto de Oruro evaluó inicialmente en 1 millón las hectáreas de tierra agrícola contaminadas, cifra que él mismo cambió luego a 220.000, en todo caso un desastre ecológico que según el Instituto de Ecología de la UMSA tardará entre 10 y 20 años en recuperarse. La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados anunció que TRANSREDES deberá cubrir el 100 % de los daños (que afectan a cinco municipios). Pero la empresa aminora la magnitud de los mismos e informa que “para la remediación ambiental” contratará a la empresa internacional especializada *Garner*.

COMENTARIO. No es el primer desastre ambiental causado por las transnacionales del petróleo en nuestro país, aunque aparentemente sí es el de mayor magnitud. Ni la Superintendencia (que ahora habla de “posibles” sanciones a TRANSREDES) ni las autoridades ambientales han tomado hasta ahora una sola medida efectiva para evitar que se repitan estos “accidentes” ni para obligar a los responsables a que pongan remedio a los daños causados (en muchos casos difícilmente reversibles). Por lo que cabe temer que la impunidad de estas empresas (expertas en sobornar no sólo pueblos indígenas sino gobiernos enteros, e incluso organizaciones supuestamente ambientalistas) deje una vez más a nuestro medio ambiente lacerado, a cambio de insignificantes impuestos y regalías. Por eso el Foro Boliviano del Medio Ambiente, que ha aprendido a desconfiar de las autoridades estatales, está convocando a Oruro a la institución ecologista “Greenpeace”. ¿Podrán hacer algo?

4. ELFEC AMENAZA CON INVERTIR FUERA DEL PAÍS

LOS HECHOS. La Junta de Accionistas de ENTEL autorizó que la empresa de telecomunicaciones invirtiera 300 millones de dólares fuera del país (según algunos analistas en represalia por el hecho de que no se ha respetado plenamente el monopolio que la empresa debería tener en las telecomunicaciones bolivianas).

COMENTARIO. Vale la pena recordar que la propaganda de la capitalización insistía en la importancia que tendría para Bolivia la inversión de capitales frescos. Sin embargo la capitalización de ENTEL, que desde el principio sirvió para evidenciar el gran fraude de dicho proceso (entre otras cosas porque la inversión se ha ido realizando gracias a las ganancias obtenidas, y por tanto eran “frescas” en otra acepción de la palabra), ahora sirve para comprobar el sentido último de todo el proceso privatizador: es la empresa nacional la que sacará capitales del país para invertirlos afuera, aunque ello viole el contrato mismo de capitalización. No se podía esperar otra cosa.

5. GOBIERNOS MUNICIPALES INICIAN NUEVA GESTIÓN EN CONDICIONES DIFÍCILES

LOS HECHOS. La segunda semana de febrero fueron elegidos y/o posesionados los nuevos alcaldes municipales de todo el país. La elección misma (donde fue necesaria) no presentó mayores novedades, pero en la mayoría de los municipios (de manera más notoria en los más grandes) se puede evidenciar grandes dificultades económicas a la hora de iniciar la nueva gestión. Debido a tres razones convergentes (el

endeudamiento desproporcionado de muchos municipios, la malversación de recursos por corrupción en casi todos, y el recorte de recursos provenientes de la coparticipación tributaria en todos –debido a la disminución de las recaudaciones nacionales como resultado de la crisis económica--), los nuevos alcaldes se están viendo obligados a recortar obras, a reducir personal, a achicar sueldos, y en el caso de Tarija se ha tenido que acudir incluso al procedimiento de declarar a la Alcaldía en quiebra.

COMENTARIO. A partir de la ley de Participación Popular muchos políticos y analistas contribuyeron a hacer creer a la población que el espacio municipal sería el elemento equilibrador del empobrecimiento a que viene siendo sometido el país por los ajustes estructurales y por la entrega de nuestros recursos a manos de empresas extranjeras. Pero a estas alturas resulta evidente que los espacios estatales locales no pueden mantenerse a salvo de las desgracias que aquejan al estado en su conjunto. El empobrecimiento del país acaba repercutiendo inexorablemente en los municipios, y la degeneración estructural que es la corrupción acaba gangrenando también la célula municipal. Difícil desafío tienen por delante los nuevos alcaldes: o moralizan su administración para compensar el obligado déficit con que inician su gestión, o están condenados a decepcionar aceleradamente a sus electores.

Tema de análisis: LA TRÁGICA GUERRA DE LOS AYLLUS

Una vez más la prensa publicó la consternadora noticia de un nuevo enfrentamiento entre Laimes (uno de los ayllus del Norte de Potosí) y Qaqachacas (otro ayllu del Sur de Oruro), con un lamentable saldo de muertos, heridos e importantes daños materiales. Pese a las declaraciones de las autoridades políticas y militares, que anunciaban se iba a tomar las medidas necesarias para que el hecho no vuelva a repetirse, en los últimos días se han reanudado las hostilidades, sólo que con la participación de los Jucumanis, esta vez aliados de los Laimes. A modo de análisis adjuntamos el comentario publicado al respecto en “30 Días” del mes de enero, titulado “*Laymes y Qaqachacas o radiografía de un estado inexistente*”.

Antecedentes: La herencia de España

La Colonia convirtió a Latinoamérica y al país en un apéndice del imperio, las actividades productivas y la fuerza de trabajo sólo tenían sentido si eran necesarias para el naciente capitalismo europeo. De esta manera se introdujeron cambios tecnológicos y formas de organización del trabajo cuya finalidad básica consistía en sacar el mayor provecho de la mano de obra de los indígenas que era gratuita. Por esta vía no se produjo un desarrollo armónico del mercado interno ni del aparato productivo, en vez de ello surgieron sectores de la economía vinculados al mercado mundial, en los que la producción capitalista era la dominante, y sectores de la producción que todavía eran precapitalistas, entre ellas la pervivencia de la hacienda, el pongueaje o el esclavismo que aún subsiste en zonas alejadas de nuestro país. Los sectores agrícolas, en Bolivia particularmente, recién se incorporan a la producción de tipo capitalista a partir de los años setenta aunque con pocas posibilidades de competir en el mercado mundial.

Los indígenas y el estado boliviano

Después de la colonia, en la etapa republicana, los campesinos ya no podían ser movilizados forzosamente y por turnos para el trabajo minero, por lo cual muchos prefirieron volver a dedicarse a la actividad agrícola. La tierras aptas para el cultivo estaban en manos de los hacendados y continuaron funcionando bajo el sistema de pongueaje, pero los terrenos áridos quedaron en manos de las comunidades indígenas que producían y continuaban haciéndolo casi exclusivamente para la subsistencia, como es el caso del norte de Potosí y Oruro.

La constitución de repúblicas no mejoró en nada la situación de las naciones originarias ya que, aunque participaron en las guerras de independencia, fueron excluidas del proceso por mestizos y criollos que sentían el mismo desprecio por los indios que los españoles. Los indígenas no fueron reconocidos dentro del nuevo ordenamiento jurídico, siguieron siendo parias, salvajes, fuerza de trabajo barata o gratuita, sin posibilidades de intervenir en la vida política y social del país y manteniendo incluso el uso de su idioma nativo, como barrera entre el Estado y su propia identidad de Aymaras, Quechuas ó Guaraníes.

A su imagen y semejanza

La masa blancoide en Bolivia siempre fue minoritaria, pero su debilidad no arrancaba de este hecho sino más bien de que su proyecto político estaba hecho del mismo barro que el país, era inviable en los estrechos

marcos delineados por el desarrollo del mercado mundial al que se incorporó tardíamente. El proyecto de construir un estado nación, sólo podía ser llevado a cabo por la aparición de una burguesía nativa que se hiciera cargo de la integración del país, del desarrollo de la industria y del agro y finalmente de la consolidación de la democracia y sus garantías. Pero esto no sucedió, a pesar del intento del 52, y el estado nacional se redujo a las zonas mineras, al aparato estatal y la burocracia de doctores. Hasta ahí también llegaron los caminos, los ferrocarriles, la policía, la electricidad, las fábricas, las escuelas, la universidad y los golpes de estado.

El resto del país, ocupado por la mayoría indígena, quedó atrapado en un tiempo estático e inmutable, que condenó a unos a seguir vagando en la selvas sin enterarse siquiera de que existe Bolivia o el año 2000; y a la mayoría a trabajar mucho para comer poco del surco que le dio la Reforma Agraria en 1952. El estado boliviano ha llegado hasta donde ha llegado su burguesía, o sea es tan harapiento como la que lo ha moldeado.

LOS HECHOS

La actual zona de Oruro y Potosí, se encuentra dentro del territorio que originalmente pertenecía a asentamientos aymaras (señorío Qaraqara), quienes nunca pudieron ser sometidos por los quechuas o los españoles y lugar al cual solo llegó el estado boliviano a través de tropas militares asentadas en las cercanías. En algún momento de la historia, comunidades quechuas Laymes y Jucumanis fueron a parar a esta zona, hecho con el cual posiblemente comenzó una larga historia de rivalidad con la comunidad aymara de los Qaqachacas asentados en la misma zona.

El conflicto entre grupos étnicos, durante muchos años, fue canalizado bajo la forma del Tinku, registrándose cada año la muerte de campesinos en el combate ritual. Aymaras y Quechuas practican desde siempre este rito, sin embargo ningún investigador sobre el tema ha dado cuenta de que tenga otra finalidad que el saldar cuentas entre comunidades rivales, el combate del Tinku otorga la victoria simbólicamente a uno de los bandos sin que ello signifique la usurpación de territorio, la matanza fuera del momento del rito, o la usurpación de bienes, ganado o cualquier otra cosa.

Muchas veces se ha registrado la antropofagia, aunque esta práctica tienen también un valor simbólico dentro del rito y es inexistente en otro momento. El enfrentamiento entre Laimes, Jucumanis y Qaqachacas no tiene un carácter ritual, a lo largo de varias décadas; el común denominador de los enfrentamientos es la necesidad. Las causas de los conflictos tienen que ver con linderos, con el robo de ganado que se come los cultivos del otro, etc. La causa del conflicto que trae muertos, sin distinción de edad o sexo, es la escasez de comida.

Ante las constantes denuncias de violencia en la zona, la única respuesta que ha dado el estado es la presencia militar en ambos lados de la zona de conflicto. Dos regimientos con soldados mal equipados serían invitados de piedra sino fuera porque los campesinos les encontraron alguna utilidad. Mandan a los jóvenes de la comunidad para realizar su servicio militar en donde aprenden tácticas militares que luego aplican en combate defendiendo la única patria que conocen, el ayllu, eso sin contar con que el ejército ni siquiera puede garantizar su propia seguridad ya que también se las ingenian para robar el armamento existente.

Pocos meses antes de finalizar el año 1999, de manera inédita los ayllus en conflicto se unieron, organizaron un bloqueo de caminos, pidiendo la intervención del estado para solucionar los problemas de linderos existentes entre ellos. Quizás este pedido pasó a sumar uno de los tantos papeles firmados que al gobierno le gusta coleccionar a sabiendas de que nunca los va a cumplir; los llaman convenios.

La sangre corre y corre

En los últimos días de primer año del 2000 otro bloqueo de caminos movilizó a las autoridades, el pedido de los campesinos era el mismo, otro convenio parecía poner fin al conflicto, mientras tanto los Qaqachacas preparaban un ataque a los Laimes, esta vez armados de fusiles FAL y viejos Mauser, la noche del 22 de enero.

La noticia del siguiente día daba cuenta de 16 muertos y siete heridos en la comunidad Laime de Sora Sora, pero los medios de comunicación no alcanzaron a reportar que los Laimes también atacaron otro poblado Qaqachaca (Viluyo), quemando todas las casas y matando a un comunario. Las acciones cesaron recién el 25 con un saldo total de 31 muertos de ambos lados.

Un conflicto que desnuda

La violencia del conflicto pone en alerta a la ciudadanía, todos tratan de explicar lo sucedido empezando por razones de orden cultural, se recurre a antropólogos e historiadores. El estado, como siempre promete, promete. El vicepresidente dice que se estudia la presencia permanente del ejército, o sea más tropa de la que actualmente existe y equipada para hacer frente a este tipo de conflictos. Mientras tanto el Presidente de la cámara de Diputados declara que no hay nada que hacer legalmente en un asunto cultural “perverso” parecido al de los africanos.

Pocos días después de la tormenta el gobierno se ve obligado a reconocer su impotencia para resolver el conflicto: no existen fondos para mantener tropa militar en la zona. Se encomiendan a dios y al diablo: piden la intervención de la Iglesia y ayuda internacional. En contraposición los indígenas advierten: “si no nos hacen caso, vamos a comprar más armas”

A manera de conclusión

Lejos del análisis de las causas por las cuales puede suscitarse este conflicto, el hecho de que haya sucedido y las maneras como se enfrenta este dilema por parte del gobierno, dan cuenta de la tremenda debilidad del estado boliviano. No ha podido desarrollar el país, integrarlo, darle solución al problema del agro, es más, no existe para los Laimes y Qaqachacas, como tampoco existe para los indígenas que mueren a manos de las empresas madereras en las selvas del oriente y obviamente tampoco existe para los empresarios que explotan madera.

El conflicto nos coloca ante un estado mendigo, aquél cuya mayoría no se dice o no se sabe boliviana. El estado boliviano, para los indígenas, no es más que una farsa que legitima su condición de vencidos, es una vacuidad que puede escupir balas y sólo por eso existe.

MISCELÁNEA

- PIL-Andina, la poderosa empresa internacional que controla la mayor parte de la industria lechera del país, ha elevado el precio del litro de leche en 20 centavos, sin elevar el precio que paga a los productores.
- Como resultado, una vez más, del incremento de los precios internacionales del petróleo, la garrafa de gas natural ha vuelto a encarecerse, costando ahora 20 bolivianos (precio de agencia), lo que hace cada vez más inasequibles los costos de la canasta familiar.
- Tras siete horas de huelga de hambre de los consejeros departamentales de Cochabamba, se adjudicó el Proyecto de Electrificación Rural Fase II (que beneficiará a 26 municipios del departamento) al consorcio Elecnor-Cobra-Elfec.
- La Corte Suprema falló en contra de la Cervecería Boliviana Nacional, que deberá pagar 60 millones de bolivianos al Fisco. La empresa sigue presentando argumentos legales para salvarse del apremio. El Director del Servicio de Impuestos afirma que se ejecutará el cobro.
- El Gobierno se enfrenta nuevamente a la universidad pública al anunciar que no incrementará su presupuesto.
- Se mantiene la decisión gubernamental de erradicar cocales de los Yungas y se mantiene la decisión de los cocaleros yungueños en contra de toda erradicación. Mientras tanto la intención del gobierno norteamericano de reducir la ayuda para la lucha anti-droga en Bolivia resulta insatisfactoria para las autoridades bolivianas.